



II FORO DEL CLIMA

Proposición de Ley
de Cambio Climático
y Transición Energética



RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA

MOTIVACIÓN

El cambio climático asociado al rápido aumento de la temperatura media de nuestro planeta con respecto a los niveles preindustriales constituye el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad, pudiendo tener consecuencias devastadoras para las generaciones presentes y futuras. A día de hoy no existe ninguna duda de que la causa fundamental del calentamiento global son las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, cuya contribución es la más significativa, junto al metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados y hexafluoruro de azufre) producidas por distintas actividades humanas que son centrales en nuestro modelo de civilización, tales como la producción industrial, la generación de energía eléctrica mediante la quema de combustibles fósiles, el transporte o la actividad ganadera.

El consenso científico fija un valor de 2°C de incremento de la temperatura global en el año 2100 respecto a los niveles preindustriales como un límite máximo absoluto a partir del cual el riesgo de padecer consecuencias catastróficas derivadas del cambio climático se vuelve inaceptable. De hecho, se recomienda fuertemente intentar mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. La situación se torna más alarmante cuando se comparan las recomendaciones de los científicos con la trayectoria que en realidad estamos siguiendo: de acuerdo con las estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido por las siglas de su nombre en inglés, IPCC), para mantener el calentamiento global en el año 2100 por debajo de los 2°C respecto a niveles preindustriales, las emisiones globales de gases de efecto invernadero han de reducirse en 2050 entre un 40% y un 70% respecto a 2010 y aproximarse a cero en el año 2100. Sin embargo, lo que está ocurriendo difiere mucho de lo prescrito por la ciencia: desde 1992 las emisiones globales de CO₂ se han incrementado un 62%.



En España, la senda de emisiones no ha seguido un camino significativamente distinto al del promedio mundial. Entre 1990 y 2007, las emisiones de CO₂ aumentaron en nuestro país alrededor de un 50 %. Solo en el periodo 2007-2013 disminuyeron de forma sostenida, debido a la reducción de la actividad económica que conllevó la crisis. A partir de 2013, las emisiones volvieron a incrementarse. De hecho, las emisiones de CO₂ en España crecieron un 4,4 % en 2017 respecto al año anterior, lo que supone el mayor aumento interanual desde 2002.

Por otro lado, el cambio climático puede verse como el ejemplo paradigmático de conflicto ecológico distributivo, en el que una minoría global se apropia de unos recursos comunes, en este caso las reservas de combustibles fósiles o la atmósfera de nuestro planeta y los servicios ambientales que proporciona (tales como la regulación del efecto invernadero y el clima), beneficiándose económicamente de su explotación y dejando para una mayoría los pasivos ambientales generados en el proceso. Esta deuda ecológica no solo existe entre distintos Estados, sino que en el seno de cada Estado existen diferencias sustanciales entre los colectivos sociales más responsables del cambio climático y los grupos de población más vulnerables, entre los que destacan particularmente las mujeres, que sufren o sufrirán las peores consecuencias del cambio climático.

Desde este punto de vista, la puesta en marcha de políticas efectivas de lucha contra el cambio climático es, más allá de su dimensión puramente ambiental, una cuestión de justicia social: puesto que en ausencia de medidas adecuadas el cambio climático solo conducirá a un agravamiento de la preocupante desigualdad social actual, es un deber del Estado adoptar medidas para proteger a la población de sus efectos y hacerlo bajo el principio fundamental de responsabilidad ambiental de *quien contamina paga*, recogido en la legislación internacional y primaria europea, y de acuerdo con el cual la responsabilidad por la degradación medioambiental debe recaer principalmente en quien la causa. Además, como corolario del principio anterior, se desprende el principio de *transición justa*, de acuerdo con el cual debe protegerse adecuadamente a aquellos que, sin ser responsables de la degradación ambiental, se vean perjudicados por las medidas necesarias para corregirla, evitando que la transición de modelo energético se convierta en una nueva fuente de injusticia y desigualdad.



Hacer frente al cambio climático supone, necesariamente, tomar medidas de dos tipos: de mitigación del cambio climático y de adaptación a este. Las primeras son medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, así, acotar el incremento de la temperatura global. Las segundas están destinadas a proteger a la sociedad y nuestro hábitat, y a disminuir el impacto en los ecosistemas de las consecuencias ya inevitables del cambio climático.

Los datos señalados anteriormente dejan claro que las medidas adoptadas hasta ahora respecto a la mitigación del cambio climático han resultado insuficientes a nivel mundial. En cuanto a España, los diferentes Gobiernos se han limitado a trasponer en el derecho nacional las exigencias mínimas de la Unión Europea, con la excepción del periodo 2004-2010, cuando el desarrollo de las energías renovables en nuestro país vivió un avance notable. Este desarrollo, como sabemos, fue frenado en seco durante los Gobiernos de Mariano Rajoy.

La situación respecto a las medidas de adaptación al cambio climático no es mucho mejor. A pesar del desarrollo reciente de las políticas de adaptación a nivel estatal y europeo, los planes y las estrategias de adaptación nacionales se encuentran en un estado preliminar y consisten principalmente en políticas no vinculantes que sirven de orientación para las actividades gubernamentales y para los actores del sector privado.

Dado el inmenso desafío que supone el cambio climático, la descarbonización completa de la economía y los importantes avances en política de adaptación que deben lograrse en pocas décadas, conviene enfatizar que esto no será posible tan solo mediante medidas técnicas sectoriales inconexas o a través de la aplicación de incentivos económicos indirectos basados en la lógica de mercado. Por el contrario, es necesario un cambio estructural en el modelo productivo que conduzca a una economía circular capaz de sustentarse íntegramente en un ciclo cerrado de materiales, en el que aquellas materias primas que no puedan obtenerse a partir de fuentes renovables sean recuperadas a través del reciclaje y en el que todas las necesidades energéticas puedan atenderse mediante un suministro basado en exclusiva en energías renovables.



Si bien la amenaza del cambio climático alcanza transversalmente todos los aspectos económicos, distributivos, medioambientales y culturales de nuestra sociedad, la transición económica necesaria para enfrentarla proporciona la oportunidad de reconstruir muchos de esos aspectos desde cero, no solo con el fin de evitar la crisis climática, sino también de enfrentar problemas estructurales tan variados como la desigualdad, la precariedad, el desempleo, la desertificación y el abandono del medio rural, la degradación de los ecosistemas, el urbanismo y la construcción de infraestructuras entendidos como un negocio privado financiado con fondos públicos, la financiarización de la economía, el abandono de la investigación científica o la soberanía energética y alimentaria, que han permanecido inalterados en nuestro sistema económico y social durante demasiado tiempo, pero que, ante la urgencia inaplazable que impone la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, deben ser revisados y corregidos. En particular, a través de las políticas de lucha contra el cambio climático es posible aportar soluciones —al menos parciales— al problema económico conocido como «el dilema del crecimiento», según el cual el bienestar económico depende del crecimiento de la economía y exige elegir entre prosperidad y sostenibilidad.

En definitiva, el profundo cambio de modelo energético y productivo requerido para afrontar el cambio climático solo puede ser alcanzado a través de un verdadero cambio en el actual modelo de país, ahondando con la profundidad necesaria en todos los aspectos involucrados en la transición para, sin dejar de velar por los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, alcanzar ese nuevo país sostenible y resiliente, capaz de afrontar este tiempo decisivo para el género humano, pero también más justo, más próspero y más habitable, digno de ser legado a nuestros descendientes junto a un planeta cuyas heridas empiecen al fin a sanar.

A partir del análisis anterior, esta Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética trata de abordar de forma integral las medidas que debe adoptar el Estado español en materia de mitigación y de adaptación al cambio climático.



CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

La proposición de ley (PL) está formada por seis títulos, además de la exposición de motivos y de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El título I presenta el objeto de la PL, proporciona algunas definiciones y determina los principios y finalidades de la misma.

Los **principios que rigen la PL** son los siguientes: quien contamina paga; responsabilidades comunes pero diferenciadas; acción preventiva y cautela; democratización de los sectores económicos regulados en la PL; justicia social; evidencias científicas; transparencia; enfoque de género; colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas.

La PL tiene como **finalidades principales**:

- La mitigación del cambio climático; esto es, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- El fomento y la regulación de la transición energética en España, entendida como el proceso de transformación de un sistema energético fósil, derrochador y centralizado a otro renovable, eficiente y descentralizado. Asimismo, la transición energética se identifica como pilar fundamental de la transformación del modelo productivo español.
- La adaptación al cambio climático, entendida como la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos respecto de los efectos actuales o esperados del cambio climático.
- El fomento de la cultura ciudadana respecto a la transición ecológica y el cambio climático.

Tanto la estructura de la PL como su contenido responden a estos principios y finalidades. El título II contiene las medidas destinadas a la mitigación del cambio climático; en particular, contiene el grueso de las medidas relacionadas con la transición energética. El título III consta de las propuestas en materia de adaptación al cambio climático. El título IV está dedicado a medidas de fiscalidad ambiental. El título V contiene propuestas para que la transición energética se lleve a cabo siguiendo criterios de justicia social. El título VI presenta las medidas de gobernanza climática.



A continuación, destacamos algunas de las propuestas contenidas en la PL.

Mitigación del cambio climático y transición energética

- Objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en los horizontes de 2030, 2040 y 2050. En 2030, establecemos un objetivo de reducción de emisiones de CO₂ del 35 % respecto a 1990, un objetivo del 45 % del consumo de energía final mediante fuentes de origen renovable (en concreto, se establece el objetivo de generar el 80 % del consumo de energía eléctrica mediante fuentes renovables) y una reducción del consumo de energía primaria mediante la implementación de medidas de eficiencia y ahorro del 40 % respecto a un escenario *business as usual*. En 2050, los objetivos son: 95 % de reducción de emisiones de CO₂ respecto a 1990, 100 % del consumo de energía final cubierto mediante fuentes de origen renovable y 50 % para el objetivo de eficiencia energética.
- Elaboración y tramitación como ley, cada cinco años, de unos Presupuestos de Carbono desglosados por sectores para los cinco años siguientes, que ayuden a conseguir los objetivos globales de reducción de emisiones. La PL incluye detallados mecanismos de participación ciudadana y coordinación territorial para la elaboración de los Presupuestos de Carbono.
- Obligación por parte del Gobierno de elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética que, entre otras medidas, incluya la rehabilitación energética anual de un mínimo de 200.000 viviendas, priorizando las actuaciones a los hogares y barrios más vulnerables.
- Auditorías energéticas para empresas con un elevado consumo energético. Las auditorías incluyen un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de sus actividades, un análisis de su vulnerabilidad frente al cambio climático y propuestas de adaptación.
- Prohibición de ampliar los permisos de explotación de las centrales nucleares en funcionamiento y de otorgar nuevos permisos, de manera que antes de terminar el año 2024 no haya centrales nucleares operando en España.



- Cierre de las centrales térmicas de carbón con fecha límite el 31 de diciembre de 2025.
- Respecto a las centrales hidroeléctricas, se establece por ley que, sea cual sea su titularidad, la prioridad en su operación será el apoyo a la integración en el sistema eléctrico de las tecnologías renovables no gestionables. Además, a partir del momento de entrada en vigor de la ley, se fija como regla general que cuando la concesión de una central hidroeléctrica caduque, la explotación será asumida por los organismos públicos correspondientes.
- Reforma del mercado eléctrico español, incluyendo un cargo a la sobrerretribución que termine con los «beneficios caídos del cielo» de ciertas centrales de generación.
- Diseño de un nuevo esquema para las subastas renovables, las cuales tendrán como criterio principal de adjudicación el coste de generación de cada tecnología, expresado en EUR/MWh. Además, se incluye la posibilidad de que se establezcan subastas específicas para los sistemas eléctricos insulares, así como zonas en las que haya quedado liberada infraestructura de red por el cierre de centrales de generación.
- Estabilidad para la retribución de las instalaciones existentes de energías renovables, restableciendo la seguridad jurídica en el sector.
- Medidas de democratización del sistema eléctrico, incluyendo:
 - La obligación de que, para nuevos proyectos de generación renovable, se abra parte de la inversión a las personas que residan en las proximidades del mismo, así como a cooperativas, pequeñas y medianas empresas y municipios cercanos.
 - La posibilidad de otorgar ayudas directas a la inversión para las instalaciones de pequeña potencia promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.
 - Una regulación que permitirá el desarrollo del autoconsumo renovable en España. En particular, se elimina el denominado «impuesto al sol» (es decir, los cargos a la energía autoconsumo).



mida instantáneamente o almacenada), se simplifican los trámites administrativos para las instalaciones de autoconsumo y se crean esquemas de retribución de la energía vertida a la red. También se permite y se regula el autoconsumo compartido mediante la creación de las redes compartidas.

- La apertura de los mecanismos de gestión de la demanda a la participación de personas consumidoras, directamente o vía agregadores independientes, y en especial a aquellas que tengan elementos de almacenamiento de energía eléctrica.
- Reestructuración de las facturas de la electricidad y del gas:
 - El término fijo no podrá representar más del 25% del término variable.
 - La parte regulada del término variable será progresiva en su precio a medida que el consumo aumente, con el fin promover el ahorro de energía y las medidas de eficiencia.
- Auditoría de todos los costes del sector eléctrico en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la PL.
- Obligación por parte del Estado de incrementar progresivamente su participación en el capital de Red Eléctrica de España hasta alcanzar el 100%.
- Declaración de la explotación de la red de distribución como servicio público de titularidad municipal. Los municipios, mancomunidades o asociaciones de municipios que lo deseen tendrán derecho a adquirir y gestionar su red de distribución.
- Medidas para asegurar que no se sobredimensionan las infraestructuras en el sector energético, con el consiguiente perjuicio para los y las contribuyentes, con especial atención a las infraestructuras de gas natural (pues, en tanto que combustible fósil, el objetivo a largo plazo es la reducción de su consumo) y a las interconexiones en el sector eléctrico.
- Prohibición en todo el territorio estatal de la prospección y la extracción de hidrocarburos. En particular, se prohíbe el uso de la fractura hidráulica o *fracking*.



- Medidas relacionadas con el transporte (véase también el apartado sobre fiscalidad ambiental):
 - Se establecen los siguientes objetivos mínimos de venta de vehículos eléctricos (turismos) respecto del total de turismos vendidos: 3 % en 2020, 25 % en 2025, 70 % en 2030 y 100 % en 2040.
 - Se establece como objetivo una penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías, expresado en toneladas-kilómetro, del 25 % en 2030 y del 50 % en 2050.
- Medidas en el ámbito de las Administraciones Públicas:
 - Se impone como norma general que los contratos de obra, las concesiones de obra y los suministros en el sector público recojan criterios medioambientales. También tendrán que incorporar este tipo de criterios las convocatorias de subvenciones. Estos criterios ambientales tomarán en cuenta el impacto de cada producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida.
 - Estrategia de Contratación Pública Verde, que contendrá, entre otros: la obligación de las Administraciones Públicas de contratación de suministro eléctrico 100 % renovable en todos sus consumos eléctricos; la obligación de las Administraciones Públicas de adquirir, siempre que sea posible, vehículos que no empleen combustibles fósiles; criterios de eficiencia energética en contrataciones para la construcción de nuevos edificios de promoción pública.
 - Promoción del desarrollo de sistemas de autoconsumo en las cubiertas de edificios públicos que deberán desempeñar un papel ejemplarizante. Se incentiva también que estos edificios fomenten el transporte en bicicleta y la movilidad compartida en los centros de trabajo estatales, incluyendo la construcción de aparcamientos de bicicletas protegidos y duchas.
 - Desinversión Estatal en Combustibles Fósiles: el Estado o cualquier entidad, empresa u organismo dependiente del Estado se abstendrá de invertir, directa o indirectamente, en empresas que se dediquen a la exploración, extracción, refinado, procesado o distribución de combustibles fósiles.



- Estrategia Nacional de Residuos, que garantizará el estricto cumplimiento de la jerarquía de residuos que ordena las actuaciones desde la prevención, preparación para la reutilización, reutilización, reciclaje, valorización material, eliminación y hasta la valorización energética.
- Objetivos de reciclaje de residuos sólidos urbanos en los horizontes de 2025, 2030 y 2035.
- Objetivos de reciclaje sectoriales en los horizontes de 2020 y 2030, incluyendo el objetivo de reciclaje del 100 % para envases ligeros y para plásticos.
- Medidas para el fomento de la economía circular, incluyendo un plan industrial que fomente la eficiencia material de la economía, el alargamiento de la vida útil de los productos y la generalización de la reparación, la reutilización y el reciclaje. Se establecen objetivos vinculantes en la tasa de uso circular de materiales, que deberán reducir el uso de materiales primarios en 2050 en un factor 10 respecto a los valores actuales.
- Medidas de mitigación en los sectores agrícola y ganadero, y en el sector de la pesca, con la finalidad de impulsar la transición hacia un modelo que contribuya a una reducción drástica en la emisión de gases de efecto invernadero.
- Medidas sobre bosques y uso del suelo que establecen el objetivo de que el 100 % del suministro de madera proceda de fuentes sostenibles antes de 2040 y que se reduzca la artificialización del suelo, alcanzando un uso totalmente circular antes de 2050.
- Creación del Fondo de Financiación Verde, cuya finalidad será financiar las medidas de mitigación y adaptación en materia de cambio climático.
- Obligatoriedad para las ciudades de más de 100.000 habitantes de elaborar un Plan Local de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
- Reconocimiento de la Investigación y el Desarrollo (I+D) como una herramienta imprescindible para posibilitar la transición hacia un modelo productivo que resulte menos intensivo en consumo de materiales y generación de residuos y, como tal, se fija la obligación de que la suma de inversión pública y privada en I+D alcance el 2 % del PIB en cinco años y el 2,5 % del PIB en diez años desde la aprobación de esta PL.



Adaptación al cambio climático

- Como eje central de la estrategia de adaptación se establecen objetivos a corto y largo plazo definidos mediante indicadores, legalmente vinculantes y basados en el mejor conocimiento científico disponible. Para ello, se reforma el funcionamiento del Plan Nacional de Adaptación, que tendrá que tramitarse como ley.
- Transversalidad e integración de las medidas de adaptación en la legislación ya existente. Por ejemplo:
 - Inclusión de un apartado de adaptación en los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.
 - Actualización de las zonas climáticas de referencia del Código Técnico de Edificación tomado en cuenta las previsiones en los cambios climáticos esperables en los próximos cincuenta años.
 - Inclusión obligatoria de riesgos de aumentos de nivel del mar o de crecidas fluviales en los desarrollos urbanos. De manera similar, la estructura basada en indicadores vinculantes de la estrategia de adaptación asume y asciende a rango de ley medidas relacionadas con problemáticas medioambientales «convencionales», tales como los conectores biológicos, el estado de los acuíferos, la deficiente red de espacios de interés comunitario marinos, etcétera.

Aunque los detalles de la estrategia de adaptación deben ser desarrollados mediante el mecanismo descrito y en coordinación con las comunidades autónomas (debido a que las medidas que deben adoptarse frecuentemente entran en sus competencias), se ha establecido una relación de medidas sectoriales mínimas. Los ejemplos más relevantes son:

- En materia de agua, se establece la revisión de los planes hidrológicos de cada confederación tomando en cuenta el estado de los acuíferos, los ecosistemas acuáticos, los flujos sólidos fluviales y su impacto en deltas y líneas de costa, así como las mejores previsiones climáticas disponibles.



- En materia de eventos climáticos extremos (inundaciones, incendios, sequías, etcétera) se adoptan como propias las medidas y los instrumentos del Protocolo de Sendai. Esto significa, por ejemplo, que debe atenderse no solamente la gestión puntual de las crisis, sino que estas deben preverse mediante modelos climáticos con el fin de preparar planes de emergencia y tener disponibles los recursos necesarios para la reconstrucción posterior.
- Se incorporan al Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad las previsiones climáticas y de adaptación, que permitan una gestión global de la red de espacios naturales protegidos —en coordinación con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en esto— y la creación de una red de corredores biológicos entre ellos.
- Se crea una estrategia para enfrentar la migración de especies y mecanismos para identificar y controlar las especies invasoras.
- Se establecen medidas para que la red de espacios protegidos marinos alcance el volumen y las características requeridas por la directiva de hábitats antes de 2025.
- Se dan medidas para el fomento del secano, la desintensificación agrícola y ganadera y se crea una Mesa de la Tierra para garantizar la gestión de las actividades basada en previsiones de capacidad de carga del suelo y de recursos hídricos disponibles, de acuerdo con las previsiones climáticas.
- Se establece el desarrollo de un Plan de Vigilancia del impacto del cambio climático en nuevas enfermedades infecciosas y sus vectores de transmisión animales. Se establece la garantía de acceso universal a la sanidad como medio de evitar la propagación de enfermedades, impidiendo la existencia de grupos de población desprotegidos.



Transición energética justa

- La PL incorpora, como elementos esenciales que acompañan al cierre de las centrales nucleares y de carbón, Planes de Transición Justa y elementos de financiación para ellos de modo que se generen empleos locales en sectores sostenibles y se garantice que, en términos netos, no se pierden empleos en las zonas afectadas por dichos cierres.
- Rediseño del bono social eléctrico y creación de un bono social gasista. Ambos tendrán las siguientes características: la renta per cápita del hogar vulnerable es el único criterio de adjudicación; la cuantía del descuento en la factura será la necesaria para que, de acuerdo con su nivel de renta, todos los hogares puedan acceder a un consumo mínimo de energía. Asimismo, se establece la obligación de crear tarifas semejantes para el consumo de agua. En todos los casos, se propone que el coste de la financiación de estas medidas sea asumido por todas las empresas que operen en el sector correspondiente.
- La PL reconoce la responsabilidad de España en tanto que país desarrollado y compromete una aportación mínima durante los próximos años al Fondo Verde para el Clima, cuyo objetivo es financiar la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo con base en nuestros compromisos internacionales.

Fiscalidad ambiental

En esta PL se incluyen las líneas generales de una reforma fiscal ambiental que contribuya a financiar las medidas de descarbonización del sistema productivo incluidas en ella. Esta reforma fiscal tiene dos características fundamentales: por un lado, pretende cerrar la brecha existente entre la recaudación ambiental en España (que apenas supone un 1,6 % del PIB) y la media la Unión Europea (donde representa el 2,4 % del PIB). Por otro, se establece como objetivo aumentar la progresividad del sistema fiscal con el fin de reducir la desigualdad económica actuando como mecanismo de redistribución.



Los principales elementos de la reforma fiscal son los siguientes:

- Introducción de un suelo (es decir, un precio mínimo) para el precio de las emisiones de CO₂ en el sector eléctrico.
- Reforma del Impuesto Especial de la Electricidad para pequeños consumidores y empresas no electrointensivas que grave el consumo de manera progresiva, manteniendo el tipo medio actual.
- Reforma del impuesto de matriculación, que pasará a depender íntegramente de las emisiones del vehículo, y del impuesto de circulación, que dependerá de una combinación de emisiones, peso y potencia. Los criterios se actualizarán anualmente para tener en cuenta las mejoras tecnológicas y los objetivos de penetración de vehículos eléctricos.
- Reforma del impuesto de hidrocarburos que homogeneice progresivamente en cuatro años el tipo general del diésel y la gasolina.

Otras medidas adicionales incluyen:

- Establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras basado en el modelo aprobado en 2012 por once Estados miembros de la UE en el Parlamento Europeo. Esta medida tiene como objetivo gravar el impacto ambiental de las actividades financieras, incluyendo tanto la capitalización de actividades contaminantes o intensivas en recursos como la presión sobre la gestión de activos ambientales en la economía real que crean las elevadas expectativas de beneficio derivadas de la economía financiera. La introducción de este impuesto en relación con la lucha contra el cambio climático ya fue propuesta por el Gobierno francés a finales de 2017.
- Reforma del IRPF que establece desgravaciones por el uso de abonos de transporte público, así como por la adquisición de electricidad 100 % renovable.
- Reforma del IVA que establece un nuevo tipo reducido para la energía eléctrica consumida por clientes vulnerables.



Gobernanza climática

- Creación de la Agencia Estatal de Cambio Climático (AECC). Dada la magnitud, la complejidad y la transversalidad de las medidas propuestas por la PL, se hace necesario un organismo capaz de dar soporte técnico al Gobierno en el desarrollo de todas las medidas de lucha contra el cambio climático, así como coordinar su puesta en marcha, y evaluar y supervisar los resultados. Este es el objeto de la AECC. Se trata de un organismo público independiente dotado de personalidad jurídica propia y con capacidad para actuar con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Al mismo tiempo, los miembros del Consejo de la AECC han de ser elegidos por una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y la AECC estará sometida a procesos de control parlamentario frecuentes y regulares, para garantizar así la legitimidad democrática de sus actuaciones.
- Creación de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en la gobernanza climática.
- Creación de la Comisión Territorial de Cambio Climático, con el objetivo de garantizar la coordinación de los distintos niveles de la Administración.

Otros aspectos relacionados con la gobernanza climática incluyen:

- Reforma del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, que se endurece con el fin de dificultar las «puertas giratorias», extendiendo la imposibilidad de trabajar en entidades privadas afectadas por sus decisiones políticas hasta cinco años después de haber abandonado el puesto.
- Medidas destinadas a la educación y la comunicación climática, como la inclusión de la enseñanza sobre el cambio climático en los currículos de todos los niveles del sistema educativo y la visibilización de personas expertas del mundo científico y de actores sociales relevantes para la divulgación de información sobre el cambio climático.



- Medidas de transparencia en el sector público, al que se exige la elaboración de informes públicos acerca del impacto conjunto de la economía española, los subsidios recibidos por sustancias contaminantes o los costes de adaptación. Además, todos los informes elaborados por la Agencia Estatal de Cambio Climático serán públicos y estarán accesibles online de forma gratuita.
- Medidas de transparencia en el sector privado, incluyendo la obligación para grandes empresas, bancos, aseguradoras y gestoras de fondos de informar sobre los riesgos climáticos a los que están sometidas sus actividades y las medidas que adoptan para hacer frente a ellos.

Perspectiva de género

En esta PL la perspectiva de género es un aspecto fundamental, en la medida en que las mujeres son más vulnerables a los efectos del cambio climático, así como a la pobreza energética. Esto se debe principalmente a que las mujeres son mayoritariamente las responsables de todos los aspectos de la economía de cuidados, una economía que verán muy probablemente sobrecargada como consecuencia de la degradación ambiental. Al mismo tiempo, lo anterior significa que muchas de las medidas de adaptación serán llevadas a la práctica mayoritariamente por mujeres. Así, esta perspectiva se ha incluido en diversas medidas a lo largo de todo el texto de la PL:

- La perspectiva de género debe ser tenida en cuenta en todos los estudios estadísticos prescritos en la PL en los que sea relevante. En particular, tanto los indicadores como la valoración del impacto definidos en los informes de vulnerabilidad se desglosarán por género cuando proceda, y se incluirá esta perspectiva en el análisis de coste/beneficio.
- La definición del modelo de ciudad al que aspirar reconoce la importancia de incorporar los principios del feminismo al urbanismo promoviendo un modelo de ciudad compacta y con niveles de desigualdad reducidos que redunde en un aumento de seguridad para las mujeres, así como en el desarrollo de sistemas de transporte público que faciliten la conciliación entre el trabajo fuera y dentro de las viviendas



- Se recogen medidas específicas para el fomento de la economía de cuidados, ya que fomentar y profesionalizar estas actividades implica simultáneamente un aumento del bienestar social, una reducción en la brecha de género salarial y un menor consumo de energía y materiales.
- Todos los organismos constituidos como consecuencia de esta ley (Consejo directivo de la AECC, Comité de Expertos sobre Cambio Climático, Mesa ciudadana de Cambio Climático, etcétera) serán paritarios.